



En el Estadio Nacional de Santiago de Chile se hallan detenidas unas 7.000 personas, acusadas por la Junta Militar golpista de pertenecer a organizaciones de la izquierda chilena.

xistas, y que esta otra suspensión —temporal— de todos los demás partidos es un segundo paso.

La reconstrucción nacional, sin duda, comienza con este periodo de eliminación de personas e instituciones pertenecientes al régimen anterior, y se fijará en una nueva constitución. Es, sin duda, el tema que más interesa a los representantes de los partidos que colaboraron en la caída de Allende —los otros, sin duda, no están ahora en condiciones de interesarse por cualquier forma de constitución—. No se sabe si en ella van a estar reconocidos los partidos políticos o si más bien será de un estilo corporativo —el corporativismo fue el nombre que aplicó Mussolini a la institucionalización de su país después de la toma del poder fascista—; Alwyn, en las declaraciones citadas, dice: «No creo, y opino como profesor de derecho político, que se puedan improvisar fácilmente (las constituciones) sobre sistemas corporativistas... Además, ella debe ser consagrada por el pueblo, por el poder constituyente. Y al pueblo no se le podrá imponer algo de esta naturaleza». El profesor de derecho político no lo es, sin duda, de historia. Y la idea de que la nueva constitución, que aún ha de redactarse, pueda ser sometida al pueblo por referéndum o plebiscito, no debe excluirse. Puede tener tantos votos favorables como ha tenido recientemente la constitución griega y el paso de monarquía a república.

PERO, ¿va a bastar este despliegue de fuerza para asegurar la política actual de la Junta? Creo que en otro artículo anterior he hablado ya del abuso que supone hablar de Junta Militar, o de atribuir un carácter militar a estos golpistas, cuando militares eran también Carlos Prats o el asesinado Schneider, o algunos de los recientemente apartados, detenidos o reprimidos. Alwyn parece sostener en sus declaraciones algo muy parecido o muy significativo en esa línea: «Según nuestros conocimientos, las fuerzas armadas chilenas no son reaccionarias, por su tradición y por la extracción mayoritaria de clase media entre sus miembros. Reconocemos que hay peligros, porque hay tendencias de ultraderecha económica y política que se están aprovechando de esta situación (...). Si esas tendencias ultraderechistas llegaran a aparecer tras la etiqueta del gremialismo o de los grupos políticos, nos encontrarán en la barricada opuesta. De todas maneras creemos que si esto sucediera encontraría barreras en los sindicatos, en los partidos políticos y en la conciencia democrática de los chilenos». ¿Es ya la moderada y atomizada organización de una oposición? Quizá, la Junta actual vaya a encontrar pronto alguna resistencia o alguna disidencia entre quienes ahora la apoyan. Si la revolución devora a sus hijos, la contrarrevolución también. Detrás de cada Naguib hay un Nasser; detrás de cada Ben Bella hay un Bumedian. Esto no es más que una de las eventualidades. Otra es la de la llamada «Operación submarina» —según informaciones de la propia Junta—: es decir, la creación de una red clandestina, con armas y abrigos, de algunos resistentes —se cita al MAPU, cristiano de izquierdas, y al MIR, revolucionario marxista— para aguantar una larga clandestinidad con acciones de guerrillas y comandos urbanos; la dureza de la represión y de las persecuciones está destinada a acabar con esa red, pero también puede ocurrir que la incremente.

PERO puede predecirse que si la Junta actual mantiene su dureza con los extremos con que ha iniciado su actuación, y si conserva —con esa misma dureza— su propia unidad, el régimen puede ser de larga duración. Construirá su legalidad propia, promulgará su constitución, se aliara con los gobiernos de ultraderecha del continente que están muy próximos, recibirá la ayuda de los Estados Unidos y no será tan fácil que le desalojen del poder, ni los marxistas ni los antimarxistas que lo han provocado.

## ARGENTINA

### ¿QUIEN MATO A RUCCI?

El 25 de septiembre, el secretario general de la CGT —los sindicatos— de la República Argentina fue asesinado. Cayó un explosivo desde lo alto de una casa sobre su coche, e inmediatamente hubo disparos cruzados desde varios puntos. Rucci murió en el acto. Rucci era el hombre que había dirigido la fuerza obrera del país en favor de Perón —tras la muerte sucesiva de otros seis jefes sindicales, a partir del "Lobo" Vandor— y formaba parte del "circulo interior", de la camarilla más próxima al presidente electo, con López Rega y con Isabelita, esposa del general, y ahora vicepresidente de la nación. Desde la izquierda se le suponía autor de la matanza de Ezeiza —liquidación de cuentas contra sindicalistas de izquierdas en el aeropuerto donde se esperaba el avión en que regresaba Perón desde Madrid—. Veinticuatro horas antes, el presidente provisional de la Argentina, Raúl Lastiri, había decretado que el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, quedase fuera de la ley. Medida obvia, porque realmente ya lo estaba. Del ERP se suele decir que es trotskista, más que por una doctrina ideológica que no tiene, porque es disidente del comunismo oficial, de la izquierda, a la que considera colaboracionista con un régimen que la camarilla de Perón se está llevando a la derecha. La relación de causa a efecto era fácil: el ERP se vengaba de esta declaración asesinando a Rucci. El jefe de la policía federal anunció que el ERP se había hecho cargo del crimen mediante un comunicado. Telefónico. Inmediatamente comenzaron unas represiones y unas persecuciones contra el grupo y sus afines, al mismo tiempo que una huelga general de protesta. En ese momento se cometió otro crimen: Enrique Gringberg, jefe de las juventudes peronistas, moría a balazos.

Pero el ERP niega que haya cometido esos asesinatos. Una nota aparentemente autenticada fue recibida por el diario "El Mundo"; en ella el ejército revolucionario negaba el crimen. "El Mundo" la publicó, e inmediatamente su edición fue confiscada. Las autoridades se basaron en que, tratándose de un partido fuera de la ley, toda reproducción de sus comunicados o manifiestos estaba también fuera de la ley, y por lo tanto, el periódico no podía circular. Los rumores de que los asesinos de Rucci tienen otros intereses y

hay que buscarlos en otros lugares se acentúan. Pocas horas antes de su muerte, la misma mañana, Rucci había recibido un anónimo singular. Era un dibujo en el que se veía un ataúd con el retrato de Rucci, sobre el que se inclinaba, con una corona de flores, José López Rega, "el Brujo", secretario particular de Perón, de quien se dice que domina todos los hilos de la política de la Casa Rosada; en la corona de flores había una cinta con la inscripción "Hora cero, día X". El dibujo estaba hecho en un papel con membrete del sindicato de los metalúrgicos. La primera interpretación de este dibujo era la de que Rucci estaba condenado a morir y su amigo López Rega iría a llevarle a su tumba. Ahora brotan en Buenos Aires otras interpretaciones. Como la de que el dibujo, más que una amenaza, era una advertencia burlesca a Rucci de que su peor enemigo era López Rega y que le eliminaría en el momento preciso, en el momento que él decidiera. Las razones para ello serían las de que José Rucci, con la fuerza obrera en sus manos, podría contrarrestar la política doméstica de la Casa Rosada, los propósitos de "el Brujo" López Rega. Y aún más, que en un caso de sucesión por muerte, natural o accidental, del general Perón, Rucci podría tener muchas más posibilidades de ascenso a la Casa Rosada que López Rega o que la persona que a López Rega conviniese. En todo caso, Rucci arrojó el dibujo a la cesta de los papeles sin prestarle demasiada importancia y con una sola frase: "¡Uno más!".

Las guerrillas del ERP no suelen limitarse en el uso de la ametralladora o del explosivo; en el uso del secuestro o de cualquiera de los sistemas de violencia, en una situación donde desde hace años política y vidas humanas están en muy estrecha relación. No es fácil de comprender, sin embargo, el interés táctico o estratégico que podrían tener en un acto como este, capaz de alinearles gran parte de la opinión pública y señal para una represión sin límites.

Hasta ahora las pesquisas dirigidas por el general Miguel Iniguez —que había sido nombrado jefe de la policía federal muy poco antes del asesinato de Rucci y que tiene fama de hombre implacable— no han dado ningún resultado. Cientos de detenciones, pero ninguna que haya podido ser conectada con la acción contra José Rucci.